University of Texas at El Paso

From the SelectedWorks of Irasema Coronado

2008

Acción Cívica Binacional en Pro de la Rendición de Cuentas: Organización Contra la Violencia en Ciudad Juárez-El Paso

Irasema Coronado, *University of Texas at El Paso*
Kathleen Staudt, *University of Texas at El Paso*

Available at: http://works.bepress.com/irasema_coronado/2/

SELECTEDWORKS™

ACCIÓN CÍVICA BINACIONAL EN PRO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: ORGANIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN CIUDAD JUÁREZ-EL PASO

KATHLEEN STAUDT E IRASEMA CORONADO*

Pese a las muchas alabanzas a México por su "transición a la democracia", a los activistas cívicos todavía les resulta muy difícil obtener una rendición de cuentas política, respuesta profesional del sistema de justicia penal e incluso un reconocimiento respetuoso de los problemas públicos, en particular los que afectan a las mujeres y a las familias de origen humilde. Algunos activistas continúan siendo objeto de amenazas, acoso e intimidación por sus esfuerzos para hacer visibles los problemas públicos y criticar las omisiones gubernamentales. Este capítulo está dedicado a la organización social contra la violencia hacia las mujeres en la zona conurbada de dos millones de personas de Ciudad Juárez-El Paso. La frontera es un lugar violento para hombres y mujeres por igual, pero en esta aportación nos concentraremos en los esfuerzos de organización social en torno a los asesinatos de jovencitas y mujeres por más de una década, a partir de 1993, y que ya pasan de 400 decesos, la tercera parte de los cuales se cometieron con violación y

* Universidad de Texas, El Paso, Texas.

mutilación (Washington Valdez, 2002; Gonzales, 2002; Benítez y cols., 1999; Staudt y Coronado, 2002, cap. 6; Ortiz, 2002).

También se analizan en este capítulo las acciones cívicas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que presionan al gobierno para que rinda cuentas. En la primera sección se describen brevemente los hechos, el orden cronológico de los asesinatos de Ciudad Juárez y las respuestas oficiales. Posteriormente, en la segunda sección se examinan los retos de la rendición de cuentas en la zona fronteriza, lo que complica la acción pública. En la tercera sección se analizan las acciones cívicas transfronterizas, seguidas por algunos comentarios finales sobre estrategias para que las acciones den resultados. El capítulo se sustenta en muchas fuentes de información: entrevistas, observaciones y comentarios de participantes de organizaciones contra la violencia, como la alianza transfronteriza mexicoamericana denominada Coalición de Oposición a la Violencia Contra las Mujeres y las Familias (en lo sucesivo la Coalición), que agrupa a activistas y organizaciones de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. El tema fundamental de este capítulo es solicitar "arropamientos institucionales" que proporcionen apoyo y recursos a una acción más fructífera, como un tratado de derechos humanos, que incluya mecanismos de supervisión por parte de la sociedad civil. Aunque México y Estados Unidos han firmado muchos tratados sobre temas que van desde libre comercio y medio ambiente hasta control de tráfico aéreo, virus fitopatógenos y hongos del suelo, no existe ningún acuerdo en materia de derechos humanos que resuelva problemas de seguridad pública, asesinos seriales sexuales y el clima general de ilegalidad que prevalece en lugares como Ciudad Juárez.

LAS FRONTERAS COMPLICAN LA ACCIÓN PÚBLICA

El problema de la violencia contra las mujeres es muy antiguo y sus raíces también son muy profundas, pues se le ha considerado durante siglos como un asunto privado. No obstante, a partir de la década de 1970, activistas de México y Estados Unidos (y del resto del mundo), pertenecientes a organizaciones locales, nacionales e internacionales, empezaron a atraer la atención hacia la violencia contra las mujeres como un problema de orden público, pues implica golpes, abusos, violación y hasta homicidio (véase Rodríguez, 2003, p. 170, sobre activismo nacional y respuesta en México). En las fronteras, la solución de los problemas que se presentan se complica aún más por las soberanías nacionales, aunque existen muchos precedentes de cooperación binacional transfronteriza, desde organizaciones oficiales como la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), hasta ONGS constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, y redes y coaliciones informales (Staudt y Coronado, 2002). A pesar de la soberanía nacional, ambos gobiernos han colaborado en temas como aguas, residuos tóxicos, calidad del aire y comercio.

Gobiernos municipales como los de El Paso y Ciudad Juárez han cooperado por muchos años para resolver asuntos como robo de vehículos, pero no los asesinatos de mujeres y niñas; esta situación cambió cuando una coalición transfronteriza de activistas contra la violencia logró una respuesta menor en marzo de 2003, gracias a la colaboración de las autoridades policiacas locales y una línea de información internacional, con apoyo del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos. Aun así, los homicidios prosiguen y se han hecho circular aberrantes teorías sobre tráfico de órganos, lo que suscitó

la intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) mexicana en mayo de 2003 y se pensó en la cooperación nacional o binacional para localizar a los asesinos, presuntamente hijos de familias poderosas que compran protección o detienen las averiguaciones.

LOS ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ Y LA RESPUESTA OFICIAL

En muchos aspectos, las fronteras son lugares sin ley. Ciudad Juárez, que es la quinta ciudad más grande de México, no es la excepción. Históricamente, se le considera hace mucho como un "pueblo de bonanza" (Martínez, 1978). El Programa Industrial Fronterizo de la década de 1960 y el aumento de las líneas de producción en la industria maquiladora fueron un imán que atrajo inmigrantes del interior del país y generó un aumento explosivo de la población. Además, el tráfico ilegal de drogas pudiera ser el negocio más lucrativo de la ciudad, que sirve de base al cártel de los Carrillo Fuentes. Cuando el programa estadounidense Guerra a las Drogas dificultó en Florida el narcotráfico procedente de Colombia, El Paso-Ciudad Juárez se convirtió en el principal corredor para el paso de droga (Bowden, 2002; USDOJ, 2003). Pero por más "salvaje y sin ley" que sea la caracterización, las fronteras coexisten bajo una intensa vigilancia policiaca que ha llegado a conocerse como la "militarización de la frontera" (Dunn, 1996; selecciones en Spener y Staudt, 1998; Williams y Coronado, 1994). Esa vigilancia tiene por objeto regular y controlar las actividades de inmigración, comercio y tráfico ilegal de armas de fuego (la mayor preocupación de México) y drogas (la mayor preocupación de Estados Unidos). En el ámbito federal, el FBI y la Drug Enforcement Agency (DEA), entre otros organismos, operan en México (Paterson, 2001). Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana tiene oficinas en Estados Unidos. Existe cooperación binacional en materia de vigilancia policiaca en las máximas jerarquías de gobierno, lo que sienta un precedente para que la haya, asimismo, en los niveles de gobierno estatal y municipal.

Entre principios y mediados de la década de 1990, los juarenses empezaron a notar ciertos rasgos comunes en los reportajes mediáticos sobre homicidios de mujeres. Se encontraban cadáveres de mujeres (en su mayoría adolescentes) en el desierto o en terrenos baldíos de la ciudad, que fueron violadas y mutiladas antes de causarles la muerte. Todas encajaban en un perfil similar: morenas, esbeltas, pobres, jóvenes, de labios carnosos y pelo oscuro. Lo que sabemos sobre las víctimas, según los expedientes policiacos, por mal integrados e incompletos que estén (Howard y Méndez, 1998), es que la mayoría eran jóvenes (entre 11 y 21 años) y que su rostro y pelo eran del mismo perfil. Antes de morir, el perpetrador las somete a torturas peculiares, como "prenderles fuego", "cortarles los pechos" y otras atrocidades. Numerosos cadáveres han sido encontrados chamuscados, con los pechos mutilados y otros detalles grotescos.

Cuando se les cuestionaba, los funcionarios públicos menospreciaban a las víctimas y las culpaban de lo sucedido por "llevar una doble vida", "vestirse provocativamente" o "andar fuera por la noche". Por supuesto, las víctimas iban vestidas de muy diversas maneras y las mataban por igual de día y de noche.

El primero en ser inculpado fue un extranjero (egipcio), Abdel Latif Sharif Sharif, pues el sentimiento de la ciudad es que "los mexicanos no hacen esas cosas". Véase, sin embargo, el capítulo de Pablo Piccato sobre los asesinatos en serie cometidos a principios del siglo XX en la Ciudad de México, donde describe algunas historias de

Las autoridades estatales han tratado a las familias de las víctimas con desprecio y falta de respeto (Staudt y Coronado, 2002, cap. 6). La mayoría de las víctimas recibían ingresos de pobreza (el salario mínimo equivale a unos 5 dólares americanos diarios).

La policía ha mostrado gran negligencia al recoger evidencias, desde el momento de colectar la ropa hasta levantar los restos de las víctimas. Varios equipos humanos, entre ellos dos coaliciones transfronterizas y algunos estudiantes, han ayudado a buscar en el desierto evidencias y encontraron prendas íntimas y otros objetos que la policía omitió retirar del lugar de los hechos. Aparte de indiferencia e intimidación, los activistas culpan a la policía de muchas otras cosas: fabricación de pruebas; expedientes de averiguación incompletos y extraviados; identificación errónea de osamentas. Todo esto hace a las familias de las víctimas revivir, una y otra vez, los asesinatos. La policía no proporciona a las familias de las víctimas versiones claras y congruentes, lo que socava aún más la escasa confianza que una población, de por sí escéptica, tiene en su policía (Giugale y cols., 2001. Véase también el capítulo de Paras sobre delincuencia, confianza y capital social en este libro). En un caso que entrevistamos en el teléfono de la familia de una de las víctimas se dejó un mensaje *(anónimo)* con amenazas para presionarla a abandonar el caso; el identificador de llamadas mostró que el mensaje provino de un número de teléfono que resultó ser de la policía judicial estatal (FN, 2003). Las madres de las víctimas informan que las han seguido y amenazado por su insistencia en exigir que se investiguen los casos de sus hijas.

Los funcionarios públicos recibían las visitas de los familiares de las víctimas, con la petición de que "hicieran algo", en apego al estilo de súplica de la política clientelista, pero sin resultado alguno.

Durante esta investigación, algunos familiares informaron que, en algunos casos, ni siquiera sabían en dónde presentar la denuncia por la desaparición de sus hijas. La gente pobre y desposeída tiene escasos conocimientos o experiencia en cuanto a las instituciones de gobierno, lo que aunado a la angustia por la desaparición de sus hijas, las hace sentirse muy frustradas con los órganos policiacos de todos los niveles. Una de las madres dice (FN, 2002) que:

> Nuestra familia se presentó en una oficina, donde les dijimos que nuestra hija no había vuelto a la casa. Nos hicieron esperar. Luego nos mandaron a otra oficina, donde un señor nos hizo toda clase de preguntas: nombre, edad, domicilio, dónde trabajábamos, y muchas cosas más. Cuando por fin llegamos a nuestra hija, su nombre, su edad, cómo estaba vestida, etcétera, ese señor nos dijo que no teníamos de qué preocuparnos, porque muchas muchachitas, como nuestra hija, se van a pasar la noche en el hotel con su novio y se quedan dormidas más de la cuenta, pero que normalmente regresan al día siguiente. [La madre asegura que se quedó pasmada], como si me hubieran echado una cubeta de agua encima.

El funcionario agregó que si su hija no había vuelto más tarde, ya avanzado el día, acudieran a otra oficina, cuyo domicilio les proporcionó. "Aquí no nos encargamos de las personas desaparecidas", expresó.

Otros familiares han informado también que los funcionarios públicos los trataron muy mal. Además, comentan que han tenido que solicitar días enteros de permiso en su trabajo para ir a la policía para dar seguimiento a sus casos. A las familias que no tienen teléfono les es muy difícil ponerse en comunicación con la persona encargada de su caso, así que optan por apersonarse con la esperanza de que les proporcionen algún informe.

A pesar de la atención pública volcada en estos casos, las cosas no han cambiado gran cosa con los años y la corrupción sigue imperando. Según la versión de una de las madres (FN/WOLA, 2/25/04):

> Un agente de policía nos dijo que el caso de mi hija se atendería con más detalle si nosotros le dábamos a él un "incentivo". Entre familiares y amigos, reunimos todo el dinero que pudimos, y se lo dimos con la esperanza de que nos dijeran en dónde estaba nuestra hija. En esos momentos, uno está tan mortificado y angustiado que no piensa con claridad, así que sentí que estábamos haciendo lo debido, pues de veras quería que encontraran a mi hija.

A fines de la década de 1990, entre las familias de las víctimas surgieron algunas organizaciones no gubernamentales, ONGS, que se solidarizaron con ellas y las apoyaron con sus actividades a favor de los derechos humanos y los derechos de la mujer. Una de las primeras fue Voces Sin Eco, un grupo de familiares de víctimas que posteriormente se disolvió. El primer grupo binacional y transfronterizo fue Amigos de las Mujeres de Ciudad Juárez, con sede en Las Cruces, Nuevo México. Los activistas trabajaron junto con las familias de las víctimas, recaudando fondos para ellas y algunas ONGS de Ciudad Juárez. Amigos es una asociación civil estadounidense con sede en Las Cruces, Nuevo México (http://www.amigosdemujeres.org). La Coalición Contra la Violencia se constituyó para darle visibilidad a los asesinatos y relacionarla con un cambio general y político en el ámbito binacional. Otros grupos feministas que ya existían, como 8 de Marzo, expresaron también su inconformidad. Luego surgieron otras ONGS, como Mujeres por Juárez, Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Mujeres de Negro, cuyas integrantes se visten de luto en los grandes eventos públicos. Los actos

de solidaridad de Mujeres de Negro se han llevado a cabo en distintas ciudades de Estados Unidos y el resto del mundo, frecuentemente ante las oficinas de los consulados y embajadas de México. La Coalición binacional antes descrita nació durante un evento de solidaridad laboral en un acto realizado en Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Finalmente, en 2003, Amnistía Internacional publicó un extenso informe sobre los asesinatos, que sumaban 370 y, según su investigación, 137 de ellos se consideran "homicidios de tipo sexual" (http://amnesty.org, 2003).

Fue hasta principios del siglo y con los cambios políticos que los funcionarios de gobierno dejaron de culpar a las víctimas, al menos en público. Entonces empezaron a ocurrir asesinatos en serie similares en otros lugares de la frontera y en la ciudad de Chihuahua (Guillermoprieto, 2003). No obstante, las policías municipal y estatal reaccionaron con indiferencia, ineptitud y, para expresar la *vox populi*, en complicidad con los asesinos, supuestamente hijos o "juniors" de familias ricas, incluidas las de los cárteles, que tenían dinero e influencia para comprarles protección. Cerca del Día de los Muertos, el diario *La Jornada* publicó en su primera plana un extenso artículo en el que mencionaba por nombre a prominentes familias de Ciudad Juárez involucradas en las averiguaciones (Washington Valdez, 2003; Burnett, 2004).

Los habitantes de México desconfían de las policías, las padecen y creen que son corruptas, y estos problemas son particularmente graves en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua en general, que se cuenta entre los estados con índices de criminalidad y delincuencia organizada (incluso el narcotráfico) más altos del país, según la PGR (véase Moloeznik, 2003). Según la encuesta multinacional World Values Survey (Inglehart, 1998), sólo tres de cada 10 mexicanos confían en la policía, mientras que cinco de cada 10 confían en el ejército (véase en Giugale y cols.,

2001 las revisiones de otras investigaciones en México). Aunque el dato es obsoleto, en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se calculó que "los traficantes de cocaína gastaron en 1993 unos 460 millones de dólares en cohechos –mucho más que el presupuesto anual 1993 de la Procuraduría General de la República" (Andreas, 2000, p. 62). Una década después, las cifras probablemente se habrán ido al cielo. Transparencia Internacional, una ONG dedicada a publicar anualmente un Índice de Percepción de la Corrupción que abarca la mayoría de los países, califica a México con 3.3 (por arriba de las peores calificaciones, que son 1.4 para Nigeria y 1.3 para Bangladesh), pero muy por abajo de los cinco países escandinavos, Canadá y Nueva Zelanda (que se ubican entre 9 y 10) (www.transparency.org, 2003). En México es frecuente que se despida o suspenda a policías municipales, estatales y federales por corrupción y vínculos con el tráfico de drogas (Andreas se refiere a 10% de la Policía Judicial Federal entre 1992 y 1995; 2000, p. 64).

Para los ciudadanos mexicanos que critican la corrupción o la impunidad gubernamental, su conducta ha significado riesgo de amenazas, intimidación y muerte. En febrero de 2002, agentes de la policía del estado abatieron a tiros al abogado Mario Escobedo Anaya en Ciudad Juárez. Era el abogado defensor de uno de los dos choferes de minibús acusados de violar y asesinar a ocho mujeres que encontraron en un lote baldío en noviembre de 2001. Este joven abogado y su padre (*sic*), Sergio Dante Almaraz (quien estaba defendiendo al otro chofer acusado), habían sido entrevistados poco antes, junto con las esposas de los dos choferes, por 20/20, el programa noticioso de ABC. Antes de la entrevista, padre e hijo habían recibido amenazas de muerte. Mientras la policía estatal perseguía a Escobedo por las calles de Ciudad Juárez, él logró llamar a su padre por el teléfono móvil. Las versiones de lo ocurrido

esa noche fueron contradictorias: el abogado se estrelló con su vehículo y murió; la policía lo balaceó en defensa propia; y la policía, después del accidente, se acercó al vehículo y lo ultimó. Cuando su padre llegó a la escena del accidente, había policías estatales por dondequiera y el joven abogado estaba muerto (http://www.nodo50.org/pchiapas/documentos/juarez2.htm). Véase también el capítulo de Fix-Fierro sobre los abogados del sistema judicial de México.

El cambio de México a un sistema pluripartidista, que tuvo sus pioneros en la frontera norte, socavó la cooperación entre los niveles de gobierno de su sistema federal. Cuando el presidente panista Vicente Fox ganó las elecciones en 2000, el priísta Patricio Martínez gobernaba el estado de Chihuahua (1997-2003) y el panista Jesús Delgado ocupaba la presidencia municipal de Ciudad Juárez (2002-2004).[2] El presidente Fox respondió a las presiones nacionales e internacionales para que interviniera en este caso de asesinatos e impunidad oficial. En el verano de 2003, autorizó que cientos de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) se acuartelaran en Ciudad Juárez, y en 2004 nombró una comisión investigadora especial con Guadalupe Morfín a la cabeza y María López Urbina como fiscal especial. Oficialmente, sus títulos fueron Comisionada de Derechos Humanos para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Morfín) y Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres (López Urbina). Antes de estas acciones, sólo se había encarcelado a Sharif Sharif en los últimos diez años, quien apeló su sentencia hasta fallecer.

[2] A Delgado lo eligieron en 2001, pero la elección fue impugnada y resuelta hasta 2002.

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA LÍNEA FRONTERIZA

La frontera atraviesa el área metropolitana combinada de Ciudad Juárez-El Paso, lo que complica las relaciones de rendición de cuentas entre el público, las víctimas y sus familias, y el gobierno. Las circunstancias regionales fronterizas dependen de dos conjuntos de instituciones políticas que sólo se asemejan superficialmente (formas presidenciales de gobierno con separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial; federalismo), pero que funcionan de formas muy distintas. ¿De qué manera puede un gobierno transparente y dispuesto a responder de manera seria y profesional a cientos de asesinatos, independientemente de que sus funcionarios sean por elección o por nombramiento? Nuestra respuesta, que primero es ideal y abstracta, va seguida por acciones concretas que ponen de manifiesto serios problemas en la rendición de cuentas.

- Empezando por el poder ejecutivo, los presidentes municipales, gobernadores y las policías municipal y judicial estatal, deberían identificar, documentar y priorizar los problemas, instruyendo a las instituciones burocráticas del sistema de justicia penal para que respondan. En México, los delitos graves como el homicidio le competen al estado, no a la policía municipal.
- Un poder legislativo dispuesto a rendir cuentas se encargaría de la supervisión, a fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente (o propondría nuevas leyes).
- Un poder judicial dispuesto a rendir cuentas actuaría con independencia de las "políticas de" los otros poderes, en estricto apego a la ley. Debido a la intransigencia del gobierno y la flagrancia de sus abusos y omisiones, los ciudadanos recurren a instrumentos legales (juicios de amparo) para exigir respuesta, acción y compensación con el objeto de profesionalizar el comportamiento gubernamental.

Los gobiernos que rinden cuentas no ofrecen ni canonjías ni inmunidad a los políticamente poderosos o económicamente acomodados. Por supuesto, las democracias tienen deficiencias y "poderoso caballero es don dinero" en Estados Unidos y en México, pero los instrumentos jurídicos son costosos y lentos, de modo que el esfuerzo difícilmente vale la pena si el resultado sólo tiene alcance y es aplicable a casos individuales. El juicio de amparo no puede utilizarse de tal manera que exija a los funcionarios judiciales que actúen con profesionalismo y competencia, en vez de a una "clase" de casos comunes (N. del E. Las autoras se refieren al régimen americano de "Class Action Law Suit" que permitiría abarcar todos los casos de asesinatos de mujeres en la ciudad).

Sea como sea, la responsabilidad de investigar y resolver los homicidios le ha correspondido a los gobiernos estatal y federal mexicanos. Y frente a las expectativas basadas en conceptos abstractos de rendición de cuentas, la respuesta ha sido sumamente deficiente.

Cuando los asesinatos atrajeron por primera vez la atención del público, los funcionarios electos se encogieron de hombros al culpar a las víctimas. Llegaron a cuestionar públicamente: ¿qué hacen las víctimas fuera de su casa tan tarde en la noche? ¿Por qué se visten de ciertas maneras? Para la burocracia y el público, estas sentencias hablaban de la baja prioridad que atribuyen a los asesinatos de mujeres.

Pero en los últimos años, los funcionarios electos dejaron de culpar a las víctimas y empezaron a expresar su interés en los crímenes; así ocurrió con todos los gobernantes, desde el presidente panista Fox, en sus inicios, hasta el gobernador priísta Martínez y el presidente municipal panista Delgado. La competencia y los conflictos entre partidos complican las cosas, teniendo como resultado que las cifras oficiales de los homicidios son modificadas después de las elecciones o de que se hacen nuevos nombramientos burocráticos, lo que merma la memoria institucional.

Estos funcionarios respaldaron, con diversos grados de mesura, la idea de que intervinieran otros niveles de gobierno o se buscara la cooperación binacional en forma de asistencia por parte del Buró de Investigaciones Federales norteamericano (FBI, por sus siglas en inglés). México solicitó dicha ayuda a fines de la década de 1990, pero los resultados no fueron concluyentes al verter los datos en la base de datos del FBI Quantico, en Virginia, Estados Unidos; volvió a hacerlo en 2002, pero esta vez no solicitó apoyo en las indagaciones, sino capacitación y acceso a recursos como laboratorios y al centro de evaluación de ADN (*vid supra*). El motivo de la solicitud del gobierno federal surgió cuando algunos informantes y acusados confesaron como motivo de los asesinatos el tráfico de órganos, el cual es un delito federal, no estatal.

Ciudad Juárez ha visto desfilar una serie de comandantes de policía. El nombramiento de uno de ellos, al que los periodistas describieron como descaradamente priísta a principios de 2003, fue muy efímero, pese a que hubo grandes expectativas públicas de que iba a "limpiar la casa" de la corrupción consuetudinaria que, debido a la confluencia de bajos salarios y narcotraficantes cargados de dinero, suele ocurrir en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez. Les dijo a los reporteros que había

recibido amenazas de muerte por su teléfono móvil. Sin embargo, cuando declaró que hay quienes gustan de ver morir jovencitas frente a las cámaras, revivió otra de las hipótesis que se rumoraban, sobre una industria fílmica clandestina que estaría detrás de los asesinatos.

La legislatura de Chihuahua ha aprobado diversas leyes contra la violencia intrafamiliar, la violación y el homicidio. Su redacción ha sido vaga y los datos sobre delitos (que están subestimados) con los que sustentaron sus decisiones no fueron desagregados por género (a diferencia de otros estados como Sonora, cuyos gobiernos están aparentemente más atentos a los problemas de las mujeres). La ausencia de datos precisos y organizados ha permitido al gobernador Martínez decir, despreocupadamente, que los índices de homicidio en Ciudad Juárez no son tan malos en comparación con otras grandes ciudades, como Nueva York. No obstante, el índice de asesinatos femeninos por cada 100 000 habitantes es alarmantemente más alto en comparación con otras grandes ciudades de México y el resto del mundo (Monárrez Fragoso, 2002). Hace dos años, algunos activistas se opusieron a una iniciativa con la que se pretendía reducir la pena por violación a una sanción inferior a la que se aplica por lesionar a una vaca (como decían los encabezados de los periódicos) (Martínez Márquez, 2002). Las comisiones del congreso local no supervisan significativamente a las instituciones burocráticas, por ejemplo, a las agencias del Ministerio Público. Tres mujeres de los tres partidos políticos mayores son parte de la legislatura actual (que está integrada por 30 miembros), y todas han dado prioridad a solucionar la violencia contra las mujeres pese a sus diferencias partidistas. No obstante, responder a problemas de seguridad pública como los asesinatos no debe ser únicamente responsabilidad de las mujeres, 10% jamás ha sido mayoría.

En el ámbito nacional, México creó en la década de 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero ésta carece de facultades de vigilancia. Se han reportado ante la CNDH muchos informes de violencia contra las mujeres. En lo que se refiere a su Poder Judicial, México reformó en 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aumentar su autonomía respecto del Poder Ejecutivo (y la política). Sin embargo, ambas reformas nacionales no han tenido eco en los ámbitos estatales. Según el profesor de la UNAM, José Luis Soberanes, la "administración de justicia en México depende de una estructura compleja, resbalosa y frecuentemente corrupta" (HRW, 1999, p. 46). En una acusación condenatoria, los expertos en materia judicial concluyen que México no extiende derechos ni protecciones basadas en el "Estado de derecho" (Domingo, 1999, 2000; Taylor, 1997).

Periódicamente, la cooperación binacional trasciende las fronteras. No obstante, el artículo 33 de la Constitución mexicana de 1917 estipula: "*Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país*" (Constitución mexicana, en http://www.georgetown.edu/odba/Constitutions/Mexico/mexico1917.html). Esto produce cierto temor de que a los activistas se les declare *persona non grata* y se les encarcele, con los riesgos inherentes de tortura (o expulse, N. del E.). Durante las actividades del "Día V"[3] que se llevaron a cabo en la frontera el 14 de febrero de 2004 (véase enseguida) con la presencia de Jane Fonda y Sally Fields, circuló en la comunidad un volante que aludía a las consecuencias que los extranjeros pueden enfrentar por su activismo político en Ciudad Juárez. Ese día, durante la marcha transfronteriza de solidaridad más grande de todos los tiempos, enormes

[3] "Día V" es una conmemoración anual para proponer el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas. N. del E.

multitudes aguardaron a las 5 000 a 8 000 personas que cruzaron la frontera junto con la presencia de funcionarios vestidos de traje de oficina que tomaban fotografías.

¿Por qué los asesinatos son un asunto binacional y multinacional? Los activistas transfronterizos señalan varios factores. En primer lugar, al menos cuatro de las víctimas son estadounidenses (de El Paso; otras son de los Países Bajos, Honduras y Guatemala) (Washington Valdez, 2002). Además, existen muchas otras personas desaparecidas de ambos lados de la frontera, como lo señala una organización transfronteriza llamada Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Staudt y Coronado, 2002, pp. 150-151). Es imposible saber cuántas de esas personas han sido asesinadas, pues aún no han localizado sus cadáveres en las vastas extensiones del desierto de Chihuahua que rodean la periferia de Ciudad Juárez. La madre de una estadounidense de El Paso que está desaparecida, atestiguó en este sentido en octubre de 2003 ante los miembros de una delegación del Congreso de Estados Unidos (FN, 2003). En segundo lugar, los asesinos seriales pudieran ser personas de nacionalidad incierta que cruzan la frontera, pues la barrera es porosa. Cuando los asesinatos se extendieron a la ciudad de Chihuahua, las autoridades obtuvieron por la fuerza la confesión de una estadounidense casada con un mexicano, pero en dicha confesión se describe incluso un golpe en una parte intacta del cuerpo de la víctima (Guillermoprieto, 2003). En tercer lugar, las economías están vinculadas, en especial las maquiladoras estadounidenses donde trabajaban algunas de las víctimas, ganando poco más que el salario mínimo vigente en México. Algunos teóricos que estudian la frontera opinan que la noción de una fuerza laboral barata y "desechable" contribuye a que en la ciudad impere un clima de ilegalidad (Biemann, 2002). Ciudad Juárez ha sido un imán para los inmigrantes desde que las

maquiladoras abrieron sus puertas en 1965, las cuales crecieron hasta que alcanzó su punto más alto en 2000: 250 000 trabajadores (unos 200 000 en 2003).

¿De qué manera se puede mejorar la rendición de cuentas? En la siguiente sección analizaremos las acciones cívicas transfronterizas, así como los avances que han logrado. Aunque hoy se tiene mayor conciencia de estos crímenes, hasta el momento las respuestas han sido débiles y limitadas. La Coalición reúne a grupos muy disímbolos que comparten una meta en común: poner fin a la violencia y aprehender a los asesinos. No obstante, otros sectores organizados, como las cámaras de comercio, los comerciantes del centro de la ciudad y las industrias maquiladoras no han presionado al gobierno pese a que la imagen de la ciudad probablemente disminuya la inversión económica en la región. Precisamente, las voces empresariales expresadas en los medios de comunicación aseguran que las marchas de protesta dan mala imagen a Ciudad Juárez.

ACCIONES CÍVICAS TRANSFRONTERIZAS

En esta sección hablaremos sobre la organización transfronteriza denominada Coalición de Oposición a la Violencia Contra las Mujeres y las Familias en la Frontera Mexicoamericana, a la cual nos referiremos en lo sucesivo como la Coalición por brevedad. Se trata de una laxa alianza binacional de organizaciones e individuos que defienden los derechos humanos y los derechos de la mujer: sindicatos laborales, organizaciones de salud, asesoría jurídica y albergue, y estudiantes. En el análisis cronológico siguiente se esbozan sus avances, desde una red regional transfronteriza de activistas con fuertes vínculos personales en sus orígenes, hasta una organización que aumentó su influencia mediante lo que Granovetter denominó "la fuerza de los lazos débiles" (1974), pues

en 2004 se entablaron relaciones impersonales con otras redes nacionales e internacionales. No obstante, los lazos personales e impersonales carecen de un "arropamiento institucional" de leyes sobre derechos humanos, políticas y recursos que incluyan la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad pública que vale la pena salvaguardar legislativamente.

NACIMIENTO Y CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL TRANSFRONTERIZO

La Coalición transfronteriza contra la violencia nació a fines de 2001, durante una conferencia de solidaridad que reunió a dirigentes de organizaciones sindicales y grupos de lucha contra la violencia en Ciudad Juárez. Agrupa estudiantes, dirigentes sindicales, maestros y centros de atención para casos de violencia intrafamiliar, como la Casa Amiga de Ciudad Juárez y el Center on Family Violence de El Paso. Muchos de esos activistas tienen relación con las víctimas. Las familias y algunos activistas, como los Amigos de las Mujeres de Ciudad Juárez (con sede en Las Cruces, Nuevo México) participaron con recaudación de fondos para apoyar a las familias en crisis. La Coalición insiste que los asesinatos son un asunto binacional. ¿Por qué? En primer lugar, aunque la vasta mayoría de las víctimas son mexicanas, también han muerto mujeres estadounidenses, holandesas y hondureñas (cuyos números siguen en debate). En segundo término, los asesinos seriales pudieran ser individuos que cruzan la frontera y ser estadounidenses, mexicanos o de otra nacionalidad. En El Paso, Texas, al otro lado del puente de Ciudad Juárez, viven 700 delincuentes sexuales registrados que pueden ir y venir fácilmente de uno a otro lado de la frontera. En tercer lugar, Ciudad Juárez es la "capital maquiladora" de México y la mayoría de las empresas de

exportación manufacturera, que son propiedad de estadounidenses, son un imán para trabajadores migratorios de todas partes de México. Muchas de las víctimas han sido obreras de las maquiladoras. Por último, se ha sabido de asesinatos por imitación en otras partes de la frontera, como Nogales y Laredo.

En sus comienzos, la Coalición surgió en solidaridad con los sindicatos independientes de México. Muchos de esos sindicatos han adoptado generalmente una postura de crítica contra la globalización, el TLCAN y el neoliberalismo; sin embargo, los activistas trabajan "dentro" de economías capitalistas y tienen estrategias reformistas. La Coalición organizó eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer y se conectó con organizaciones tan al sur como la ciudad de Chihuahua, la capital del estado al que pertenece Ciudad Juárez. En 2002, cientos de personas de ambos lados de la frontera internacional se congregaron para luego reunirse en la línea fronteriza, retrasando el tráfico del puente, cerca de la enorme cruz de madera que está en el centro de Ciudad Juárez, en la cual se planta un clavo por cada víctima. Algunos manifestantes se ataviaron con dramáticos colores simbólicos y dondequiera se veían los símbolos cuasi-religiosos de los asesinatos: cruces negras sobre fondo rosado.

La Coalición solicitó una fuerza de tarea binacional para fortalecer la cooperación e investigar a fondo los crímenes, con mayor participación del FBI. Los funcionarios del FBI respondieron que tenía que haber una invitación formal del gobierno de México para que ellos pudieran intervenir en estos casos de violencia contra las mujeres. Resulta irónico que en marzo de 2006, el FBI, sin invitación alguna del gobierno mexicano, haya expresado su grave preocupación por el robo de microcircuitos en varias maquiladoras de Ciudad Juárez y quería estar informado de las medidas de seguridad que la industria

estaba adoptando para evitar tales pérdidas. El portavoz adujo la posibilidad de que pudieran ser utilizados por terroristas (www.diario.com.mx/portada/panorama/nota.asp?notaid=ab851f118195044683ada736d009ea6e). Las policías locales en ambos lados de la frontera han cooperado por años en materia de robo de vehículos, un delito muy común en las fronteras. Además, ambos gobiernos colaboran en muchos otros asuntos, desde calidad del agua y el aire, hasta empresas y comercio. Sin embargo, a los "radicales" de la Coalición les parecía extraño, e incluso incómodo, acudir a la policía o las instituciones investigadoras en busca de solución a los problemas de las mujeres asesinadas. La Coalición también se acercó a *Crimestoppers*, una organización sin fines de lucro que recibe y paga por obtener indicios que ayuden a resolver delitos, pero tampoco hubo resultados. Su consejo directivo decidió no iniciar acciones que significarían criticar a sus homólogos y a la policía mexicana.

Otra actividad consistió en revisar un documento que encuadra y legitima intervenciones de salubridad en la próxima década. La Comisión de Salubridad Fronteriza de Estados Unidos y México, un organismo oficial integrado principalmente por médicos de ambos países con nombramientos políticos, emitió un informe llamado "Fronteras saludables 2010", en el que se omite por completo la violencia contra las mujeres como un problema de salud, lo mismo que otros temas de preocupación, como la maternidad voluntaria o la separación de datos por género. Los integrantes del Consorcio Transfronterizo sobre Género y Salud de la Frontera de Estados Unidos y México aportaron su experiencia y utilizaron sus contactos para redactar, con mucho tacto, una crítica en la que proponían el uso de un nuevo lenguaje, y lograron que la incluyeran en la agenda de la Comisión, lo que es toda una hazaña en cuanto a organizaciones burocráticas

se refiere. Ese documento se ha ido abriendo paso en el orden de prioridades de consideración por parte de la comisión por casi un año (al escribir este documento aún no había resultados).

La Coalición se reunió con el senador por Texas, Eliot Shapleigh, un defensor clave de acciones contra la violencia que ha estado dispuesto a usar su nombre y posición para impulsar la cooperación binacional. Él es uno de los pocos políticos que son proactivos en esta materia y están dispuestos a trabajar por la justicia social. Revisamos muchas copias de las cartas enviadas a funcionarios estadounidenses, desde el presidente Bush hasta los departamentos de justicia y gobernación y el FBI. Transcurren meses antes de que se reciban respuestas, y en la mayoría de ellas se define el asunto como un tema judicial que México debe resolver por su cuenta, a menos que solicite apoyo a Estados Unidos. Gracias a los buenos oficios del despacho del senador, los integrantes de la Coalición se reunieron con funcionarios del FBI (que, por su parte, se enteró del punto de vista de los activistas). El FBI respondió afirmativamente a la nueva invitación que México le hizo en 2002 (la primera fue en 1998) para participar. Una petición de un académico, que fue redactada conforme a la Ley de Libertad de Información y solicitaba el primer informe del FBI, sufrió retrasos con el pretexto de averiguar si 'en verdad' se trataba de una investigación académica, además de los acostumbrados meses de espera de la respuesta.

En otro momento de las movilizaciones, integrantes de la Coalición se presentaron vestidas de luto en los almuerzos de la Asociación de Esposas de Plantas Gemelas y el Club de Mujeres Republicanas. Las esposas de los gerentes y ejecutivos de las plantas de maquila de propiedad mayoritaria estadounidense establecidas en Ciudad Juárez, viven en El Paso. Aun allí se han comentado los

asesinatos y se critican las desigualdades salariales. En otra reunión, la primera dama de Texas, Anita Perry, estuvo dispuesta a que la "abotonaran" con la simbólica cruz negra sobre fondo rosado, que refiere a las mujeres victimadas, a compartir con la Coalición los nombres de su personal y a proponer estrategias. En una ocasión (en su visita a El Paso durante la campaña) asistió a una junta con miembros de la Coalición, con todo y guardaespaldas. En términos de resultados o solución de problemas, estas actividades rindieron pocos frutos, salvo por la generación de mayor consciencia sobre el problema y la invitación a presentar propuestas de subvención para la incipiente fundación First Star Foundation (símbolo histórico de la otrora república independiente, la Texas de la Estrella Solitaria) o más invitaciones para presentarse como oradoras en otros almuerzos.

Únicamente cuando los integrantes de la Coalición recurrieron a eventos públicos dramáticos, con cobertura total de medios de comunicación, las redes regionales, nacionales e internacionales se movilizaron para inducir respuestas en segmentos más amplios del público. En México, la cobertura de los medios tendió a ser mayor que en El Paso y el resto de Estados Unidos, particularmente en los periódicos con posturas más críticas contra el gobierno y el partido político predominante (PRI), que era el que controlaba el gobierno del estado en Chihuahua. El gobernador Patricio Martínez nombró a una activista de muchos años, Vicky Caraveo, para que encabezara el Instituto de la Mujer en Chihuahua, al que asignó un jugoso presupuesto. Se sabía poco sobre prioridades presupuestarias y gastos, salvo por el pago de estipendios a las madres de algunas víctimas. Las tradicionales estrategias mexicanas de 'divide y vencerás', aunadas a campañas de desinformación en un contexto de nula transparencia en el gobierno, tuvieron el efecto de polarizar a los grupos

de derechos humanos. "¿Quién está lucrando con nuestro dolor?", preguntaban algunas madres (FN, 2002, 2003). Para los estudiosos de la política mexicana, la cooptación manipuladora se ha visto siempre como una respuesta a los reclamos de la sociedad civil.

Los eventos de difusión pública en que ha participado la Coalición han sido espectaculares y dramáticos, llenos de simbolismo, colores e iconos. Por ejemplo, en abril de 2002, las estudiantes de la Alianza de Liderazgo con Mayoría Feminista de la Universidad de Texas en El Paso, patrocinaron una marcha de duelo en silencio, sosteniendo grandes cruces negras sobre placas rosadas, en una parte muy transitada del campo universitario. Muchos periódicos tomaron fotos de las 150 dolientes, incluso una que iba vestida con un atuendo completo de "el destripador". En Ciudad Juárez, breves e impresionantes exhibiciones teatrales improvisadas generan conciencia en las calles, en solidaridad, en el puente internacional y en actos transfronterizos. A principios de noviembre, se llevaron a cabo celebraciones del Día de los Muertos en Ciudad Juárez y El Paso, en las que se instalaron altares con velas, objetos y recuerdos de las difuntas. En las universidades de ambos lados de la frontera, las estudiantes han elaborado hermosos altares en honor de las mujeres y niñas asesinadas.

Las películas y presentaciones teatrales políticas ofrecen amplias oportunidades de difusión pública con imágenes visuales imborrables. Algunas de estas actividades se complementan con recaudación de fondos. La obra de Eve Ensler, *Los monólogos de la vagina*, se ha presentado varias veces en El Paso y en Las Cruces, Nuevo México. El lenguaje directo, como la palabra vagina, es impensable para los dueños de establecimientos, de modo que a los actores se les dificulta a veces conseguir publicidad o que se escriba la palabra vagina en las marquesinas. La red

de organización contra la violencia, mejor conocida como "Día-V", ha ofrecido un enlace nacional e internacional entre la región de la frontera y el mundo. En 2003, Esther Chávez Cano, la activista contra la violencia que dirige la Casa Amiga para víctimas de abuso en Ciudad Juárez, fue nombrada como uno de los "21 líderes para el siglo XXI 2003" durante los preparativos para el Día-V. Eve Ensler visitó Ciudad Juárez para una jornada completa de eventos culturales como teatro improvisado y marchas, pero también reuniones con funcionarios de la judicatura estatal. En el último evento del día, Eve Ensler habló en inglés frente a las oficinas de la Procuraduría General del estado de Chihuahua y tradujeron sus palabras.

La película de Lourdes Portillo, *Señorita extraviada*, sobre los asesinatos y las familias afectadas es emblemática. Aunque el filme es crudo, se trata con respeto a las víctimas. Portillo es de Ciudad Juárez, no una simple turista videógrafa, fotógrafa, periodista y académica. La película ha sido exhibida muchas veces en la región, lo mismo con fines de difusión pública que para recaudación de fondos para servicios contra la violencia. El filme puede conseguirse en inglés y en español. La versión en inglés fue exhibida por la televisión pública nacional en Estados Unidos. En 2003, Portillo recibió en la Ciudad de México un reconocimiento tipo premiación de la academia. Esa película aumentó considerablemente la conciencia del público. En las entrevistas, los regidores del cabildo municipal mencionan horrendos detalles específicos de la película y expresan empatía y preocupación por sus hermanas, madres e hijas.

En la conferencia laboral y contra la violencia del 22 de noviembre de 2002 en Ciudad Juárez, que fue una secuela de la junta que dio nacimiento a la Coalición, se invirtió mucho tiempo y energía en invitar oradores y asegurar auditorio. Se convidó al entonces alcalde de El Paso,

Ray Caballero, pero no acudió ni envió un representante. Las negociaciones de aquel momento sobre otros asuntos lo disuadieron de participar en el tema potencialmente escabroso y vergonzante de la violencia. El presidente municipal de Ciudad Juárez fue invitado y acudió, pero se retiró inmediatamente después de su breve discurso y no dejó personal encargado de escuchar y tomar nota de otras ideas y estrategias que pudieran haber sido útiles para el seguimiento. No obstante, se fortaleció la solidaridad con líderes sindicales como los telefonistas, que ofrecieron exigir acciones contra la violencia mediante huelgas.

DE REDES REGIONALES A REDES TRANSNACIONALES Y GLOBALES

En febrero de 2003 fueron descubiertas otras cuatro víctimas en el espacio de una semana, todas violadas y mutiladas antes de morir; entre las adolescentes había una niña de seis años. La cuenta de muertes sigue en aumento, aunque la cifra total siga siendo tema de debate e incertidumbre. El problema se complica no sólo por las discrepancias en cuanto a cifras, sino por el hecho de que las víctimas fueran mutiladas previamente. Las autoridades mexicanas revisan periódicamente las cifras y las modifican después de cada elección. Los integrantes de la Coalición reaccionaron ante los asesinatos de febrero con una conferencia de prensa a la que invitaron a medios de comunicación mexicanos y estadounidenses. La cobertura fue muy amplia en la zona fronteriza y el hemisferio (por medio de la cadena estadounidense en español, Univisión). A veces los activistas afirman que todos los cadáveres están mutilados, pero según otros cálculos confiables sólo uno de cada tres presenta mutilaciones. Además, algunos activistas afirman que todas

las víctimas son trabajadoras de las maquiladoras, pero nosotras, como investigadoras, sólo sabemos de 23 de esos casos.

Igualmente al comenzar 2003, la Coalición habló con representantes políticos de la ciudad y el condado para exigir que se aprobara una resolución contra la violencia y por la proclamación de un Día Internacional de la Mujer. Dicha resolución es muy limitada y plantea el despliegue de una fuerza de tarea binacional, recursos y datos policiacos transfronterizos, y otras estipulaciones. La proclamación fue amplia y general, ofreció la constante oportunidad de "educar" oleadas de gente cada vez más amplias, sobre las desigualdades sistémicas y cotidianas basadas en el género mediante documentación oficial y cobertura mediática. El cabildo municipal y el Tribunal de Comisionados del Condado aprobaron la resolución y la proclama. A los representantes políticos les preocupan los derechos humanos, pero también la mala imagen de la frontera y la fuga de inversiones económicas. En cambio, el cabildo municipal de Ciudad Juárez tiene una agenda controlada y sus sesiones no están abiertas a los comentarios públicos, lo que impide que se generen documentos homólogos para testimoniar los hechos. Debe tenerse cuidado en no precipitar la conclusión de que los gobiernos municipales y locales de Estados Unidos responden mejor, pues si el pluralismo caracteriza a la política de Estados Unidos, se trata de un 'pluralismo de elite' (http://repositories.cdli). Las posiciones estratégicas y la visibilidad de quienes proponen puntos para las agendas políticas tienen consecuencias políticas.

En marzo de 2003, el alcalde Ray Caballero, de El Paso, anunció, junto con el jefe de policía, que habría cooperación entre las autoridades judiciales de ambos lados de la frontera. También estuvieron presentes funcionarios mexicanos, algo molestos porque en la

conferencia de prensa los periodistas y las ONGs les estaban haciendo preguntas incómodas. Una vez más, en 2003 se llevaron a cabo mítines y marchas en el Día Internacional de la Mujer. Se requiere mucho tiempo para conseguir los permisos, pagar las cuotas y solicitar la condonación de tarifas oficiales que costarían cientos de dólares de "protección" policiaca en El Paso en caso de que la marcha interrumpa el tráfico. Las solicitudes tienen que ser notariadas e incluyen la promesa de que la Coalición pagará por la basura que tenga que recolectarse. Se necesita por lo menos un mes de anticipación para la aprobación burocrática y la autorización del cabildo en El Paso (a diferencia de la oportunidad de hacer mítines más espontáneos en Ciudad Juárez, donde se toleran y esperan las manifestaciones callejeras). Quizás los observadores informales se pregunten qué hay de las garantías y salvaguardas de "libertad de expresión". Una vez más, cientos de personas salieron a las calles en ambos lados de la frontera, con muchos reporteros y camarógrafos de televisión. También estuvieron presentes un periodista y un fotógrafo de AP para cubrir el reportaje.

El senador Shapleigh y la diputada Norma Chávez presentaron una resolución conjunta sobre las investigaciones ante la legislatura de Texas, a principios de abril de 2003. Entonces, los comités de la Cámara de Representantes y el Senado tuvieron audiencias (grabadas en audio y video que pueden conseguirse por Internet, pues Texas cuenta con acceso electrónico abierto). Invitaron a la Coalición a atestiguar y se elaboraron declaraciones por escrito para incluirlas en el expediente público. Representantes y senadores escucharon y leyeron el testimonio después de ponerse en las solapas los botones rosados con cruces negras que les proporcionó la Coalición. También testificaron activistas de Austin. Como resultado,

la Ley HCR 59 fue aprobada en la 78 Sesión Legislativa de Texas.

Mientras tanto, se organizaron protestas frente a los consulados mexicanos de toda la región y otras partes del mundo. El ciberactivismo generó un alud de correos electrónicos y fotografías que dieron fe de la solidaridad de Tokio, Belgrado, Madrid y muchas otras ciudades. Poco antes, en marzo, representantes de la Coalición fueron invitados a la 47 sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Situación de las Mujeres, en la ciudad de Nueva York. Participaron una profesora universitaria (Coronado, copresidenta de la Coalición) y una estudiante. Esto suscitó otra presión a las autoridades mexicanas y generó comprometidos pero débiles enlaces con lugares distantes. No obstante, las comisiones de derechos humanos suelen reportar abusos en vez de ejercer autoridad para imponer soluciones.

En Ciudad Juárez hay una ONG que trabaja ampliamente para comunicarse con Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un intento por insertar los asesinatos de Ciudad Juárez en sus agendas (Ortiz, 2002). Finalmente, Amnistía Internacional se unió a la red de organizaciones concentradas en este tema. En el verano de 2003, publicó una monografía sobre los asesinatos, el sistema de justicia penal mexicano y la falta de respuesta por parte del gobierno (www.amnesty.org, 2003).

De hecho, la Coalición no sólo tiene las conexiones interamericanas e internacionales antes citadas, sino que está vinculada con la Red de Solidaridad con México y las coaliciones contra la violencia de otras ciudades de Estados Unidos y México. De ese modo, demuestra la "fuerza de los lazos débiles" (Granovetter, 1974), es decir, la fuerza colectiva de las relaciones personales sólidas que

son una conexión con los grupos regionales, nacionales e internacionales que se analizan en Fronteras No Más (Staudt y Coronado, 2002). La representante Hilda Solís, en respuesta a los muchos juarenses miembros de su base política en Los Ángeles, se ha dedicado activamente a organizar a la Junta Local Hispánica para que se comunique con el presidente Fox y presionarlo para que intervenga en la solución de los asesinatos. La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996 contiene las bases para trasladar a jurisdicción federal los casos, de la procuraduría del estado de Chihuahua a la Procuraduría General de la República.

La Oficina de Asuntos Latinoamericanos de Washington ayudó a organizar la visita y el seguimiento correspondiente (http://www.wola.org). En octubre de 2003, Solís encabezó una delegación que viajó a la frontera, visitó a las familias de las víctimas, se entrevistó con activistas de las ONGs, conversó con funcionarios públicos y recorrió los sitios donde se encontraron los cadáveres. Esa visita suscitó una amplia cobertura de medios de comunicación impresos y televisivos. La representante Solís presentó al Congreso una resolución que promovería la participación de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones binacionales. La Resolución Concurrente 90 de la Cámara de Representantes fue aprobada por unanimidad en mayo de 2006. El senador de Nuevo México, Jeff Bingaman, presentó una resolución idéntica en el Senado: la Resolución Senatorial Concurrente 16.

Otras universidades organizaron eventos para dar visibilidad a los asesinatos y aumentar la presión para que los gobiernos actuaran. En abril de 2003, Arizona State University West patrocinó la conferencia "Género, Justicia y Frontera". Estudiantes y docentes decoraron 320 vestidos, uno por cada víctima, y los colgaron en otras tantas cruces de 90 cm de altura, en el patio central del

campo universitario. Varios de esos vestidos fueron exhibidos en octubre de 2003 como parte de la exposición de la Biblioteca de la UTEP para conmemorar el Día de los Muertos, que dura un mes. Desde fines de octubre hasta el 2 de noviembre, la Universidad de California en Los Ángeles presentó la conferencia "Los asesinatos de las maquiladoras", que atrajo a más de mil participantes y muy diversos oradores, desde expertos hasta familiares de víctimas y activistas de ambos lados de la frontera (http://chavez.ucla.edu/maqui_murders). Por medio del hipervínculo Operación Digna (en honor de Digna Ochoa, una abogada defensora de los derechos humanos asesinada en México), los ciberactivistas, en particular Coco Fusco, de Columbia University, organizaron una "avalancha electrónica" contra las instituciones gubernamentales mexicanas, que se sintió con tal fuerza que el gobierno mexicano envió a los organizadores de la conferencia un extenso fax, en el que prometía crear nuevos órganos de coordinación (FN, 2003).

En México, el presidente Fox se pronunció contra los asesinatos y nombró a nuevos funcionarios federales y ordenó investigaciones intergubernamentales coordinadas. La atención se enfocó nuevamente en Ciudad Juárez a principios de 2004, cuando se descubrieron cadáveres sepultados en terrenos baldíos, lo que suscitó la remoción de policías estatales por presunta complicidad y nuevas acciones binacionales (como la orden del gobernador Perry, de Texas, para que se desplegara una patrulla canina, recurso no utilizado hasta entonces para esclarecer los asesinatos de las mujeres y niñas). En los reportes policiacos de *Dallas Morning News* se publicaron artículos sobre víctimas "secuestradas, violadas y asesinadas para 'celebrar' los éxitos del contrabando de drogas" y, una vez más, se señaló la complicidad de la policía (Corchado y Sandoval, 2004).

No obstante, la atención volcada en estos asesinatos llegó al cenit durante la denominada Semana-V, en particular el "Día-V", que se conmemora el 14 de febrero de 2004. Los estudiantes de la Universidad de Texas en El Paso organizaron una conferencia de todo un día, talleres para hombres, exhibiciones de arte y series de películas durante la semana previa al Día-V. En esa fecha, entre 5 000 y 8 000 manifestantes cruzaron la frontera de El Paso a Ciudad Juárez en solidaridad con las víctimas de la violencia. Esa ha sido la marcha más numerosa que jamás haya cruzado la frontera en la historia de la región. Muchas personas acudieron de fuera de la región fronteriza y hubo reporteros de lugares tan lejanos como Europa. Celebridades de México y Estados Unidos representaron *Los monólogos de la vagina*. Eve Ensler escribió un nuevo monólogo sobre los asesinatos en Ciudad Juárez, que fue representado en la frontera y más de 1 000 ciudades del mundo. Este monólogo formará parte permanente de las futuras producciones dramáticas de la obra (www.vday.org).

Como se aprecia en este esbozo cronológico, la Coalición ha probado distintas estrategias durante casi dos años para generar mayor conciencia y difusión pública, apoyar la recaudación de fondos y remitir materiales escritos que pudieran incorporarse a documentos y políticas públicas. Una versión de la fuerza de tarea binacional que buscó ha sido adoptada. Ahora la Coalición avanza hacia otras opciones estratégicas: ubicar 'modelos' legislativos de otros estados, como Sonora, que pudieran adoptarse en Chihuahua; audiencias en el Congreso; desarrollo de estrategias de coaliciones nacionales y binacionales; y presiones económicas contra México. No obstante, los asesinatos prosiguen, mientras los engranajes de la justicia giran lentamente.

OTRAS ORGANIZACIONES: SILENCIOS QUE GRITAN

Aparentemente, la seguridad pública debiera ser un asunto de interés para otros sectores, incluso organizados como las barras de abogados, empresas, maquiladoras y comerciantes. Las víctimas son madres, hermanas, hijas, tías y amigas. E indudablemente eso significa más que "intereses femeninos" o "intereses de derechos humanos". Aunque los activistas con fundamento religioso del lado de El Paso han expresado su consternación, en Ciudad Juárez no se observa lo mismo, y ese es el primer silencio que grita que identificamos.

No sorprende que los intereses económicos no hayan participado en acciones cívicas destinadas a fomentar la seguridad pública y aminorar los homicidios, incluyendo el asesinato de mujeres y niñas en Juárez. A los comerciantes del centro les molesta el crucifijo, pues dicen que puede alejar a los turistas, en vez de estar dispuestos a expresar su preocupación o contratar seguridad privada. Varias de las chicas desaparecieron de la "zona de miedo" del centro de la ciudad, lo que incluye restaurantes, bares, escuelas de cómputo y tiendas de música.

En un desayuno de economistas y ejecutivos de negocios de ambos lados de la frontera, celebrado en abril, el propietario de varias maquiladoras habló del "terrorismo fiscal" al que la Secretaría de Hacienda somete a la industria y del aumento de los costos de producción (a pesar de la minúscula proporción de esos costos que llega a las manos de los trabajadores, pues a la industria le preocupa "protegerlos" contra las tasas de impuestos más altas). Dado ese interés en la política, se antoja razonable que la industria también tome partido en lo referente a la seguridad pública, sobre todo porque algunas de las víctimas han sido trabajadoras de maquila. Hicimos

preguntas en público y en privado, y la respuesta fue que años atrás hubo un acercamiento con la Asociación de Maquiladoras (AMAC), para pedirle que expresara su posición, pero no hubo respuesta de su parte. Y la industria, que se considera "invitada" en un país extranjero, supone que no puede tener efecto alguno. Al preguntar el motivo por el que las cámaras de industria y comercio (Canaco y Canacintra) no participan, la respuesta es que la Ciudad de México ejerce toda la influencia y ellos están relativamente maniatados. Por supuesto, nos parece que esas explicaciones rayan en lo ridículo.

Los abogados comparten un interés en los derechos humanos y el Estado de derecho. Varios han estado dispuestos a hacerse oír y criticar la ineptitud con que el gobierno ha atendido los asesinatos. En diciembre de 2002, un abogado activista de la Coalición fue molido a golpes por la policía o sus rufianes a sueldo (http://repositories.cdli11). Le dijeron que debió callarse la boca en cuanto a su trabajo como abogado defensor. Para quienes critican a la policía por su ineptitud, frecuentemente nos maravilla su eficiencia para prodigar intimidación y amenazas en este y otros ejemplos.

También nos provoca curiosidad la ausencia de atención académica al tema de los crímenes sexuales y asesinatos de mujeres en la literatura sobre el sistema de justicia penal en México o la frontera (no obstante, véase Piccato, 2001; también se encontrará una frase en el libro de Bailey y Chabat, 2002, p. 45).

En este análisis cronológico, que parte del nacimiento de la organización transfronteriza y refiere su maduración y crecimiento, se esboza el modo en que los activistas transfronterizos han ayudado a transformar un movimiento regional fronterizo en un movimiento nacional e internacional en torno a los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Para 2003, los grupos transfronterizos

siguieron demostrando su experiencia empírica, pero las redes nacionales e internacionales rebasaron esos esfuerzos y fortalecieron el proceso de dar visibilidad a los asesinatos y presionar a los gobiernos para encontrar soluciones binacionales. A pesar de esos avances, también hubo reveses y la resistencia persistió. Aún está por verse una respuesta clara por parte de la comunidad empresarial, que se ha concretado a culpar a la organización social de la presencia de menos turistas en el centro de Ciudad Juárez y el desplazamiento de maquiladoras a China (que en realidad obedece a muchos factores, principalmente el menor costo de la mano de obra). Las publicaciones académicas formales han brillado por su ausencia, salvo por una frase en Bailey y Chabat (2002, p. 45). Mientras tanto, los asesinatos prosiguen, continúan desapareciendo jovencitas, las familias de las víctimas aún claman justicia, y las aprehensiones no paran. A Edgar Álvarez Cruz lo detuvieron en Denver, Colorado, en agosto de 2006. El embajador estadounidense en México, Tony Garza, se refirió a la captura de Álvarez Cruz como "un avance mayor" en el esclarecimiento de cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. A Álvarez Cruz se le acusó de haber infringido las leyes migratorias estadounidenses, y actualmente está preso en el Cereso de Ciudad Juárez.

> "Es el caso más importante que me han asignado jamás. Pero también el más fácil", dice Abraham Hinojos Rubio, el abogado defensor de Álvarez. "Pues una vez más, somos testigos de la ineptitud, incompetencia y desesperación de las autoridades en su afán de resolver estos homicidios, sin importar cuántas vidas inocentes se lleven entre las patas. Lo único que puedo decirles a las autoridades en ambos lados [de la frontera] es: '¿Dónde están las pruebas'?" (http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/latestnews/stories/101706dnintalvarez.336591b.html).

CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO

La organización social transfronteriza está viva y en forma en Ciudad Juárez y El Paso, pero los activistas enfrentan grandes retos en sus intentos por presionar a los gobiernos en las complejas zonas fronterizas. Entre esas complicaciones destacan varios gobiernos, falta de profesionalismo y baja prioridad a la solución de los problemas que enfrentan las mujeres y los pobres.

La organización social transfronteriza es una expresión de los intentos de coordinación y los afanes de la sociedad civil por hacer llegar la democracia hasta el último espacio problemático, como la frontera entre Estados Unidos y México, donde las relaciones de transparencia y rendición de cuentas se vuelven complejas debido a la presencia de soberanías nacionales y muchas instituciones. Además, a esas complicaciones hay que sumar las amenazas y actos de intimidación de que son objeto los activistas, el escaso profesionalismo de la policía y la baja prioridad que se da a la solución de los problemas que enfrentan las mujeres y los pobres. Aunque el TLCAN y muchos otros acuerdos y tratados bilaterales generan arropamientos institucionales que proporcionan influencia política y recursos o subsidios suficientes para que los activistas y funcionarios atiendan los problemas que le son comunes a Norteamérica en las fronteras, no existen tales arropamientos en cuestiones de derechos humanos y seguridad pública. La cooperación binacional empezó con varios pasos tentativos, pero aún hay mucho por hacer si es que queremos lograr que el Estado de derecho prevalezca y toda la gente de la región tenga acceso a la justicia.

RECOMENDACIONES NORMATIVAS

Hemos organizado nuestras recomendaciones en varias categorías. Entre ellas figuran acciones de corto, mediano y largo plazo para México, Estados Unidos y la región norteamericana en general.

Acciones en México

- Exigir la intervención federal para el esclarecimiento de más de una década de asesinatos de mujeres y niñas no resueltos. Tal intervención está debidamente fundada en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996.
- Usar incentivos en materia de reparto de utilidades para impulsar: reformas en los ámbitos estatal y municipal (una tradición de muchos años en México [Rodríguez, 1997]), como las leyes de acceso a la información de 2003, que actualmente sólo están vigentes en el ámbito federal; profesionalización en la actuación de las policías estatal y municipal; capacitación policiaca en materia de violencia intrafamiliar; y clasificación de información por género en todos los delitos sexuales y casos de violencia intrafamiliar, de modo que los informes sean más fidedignos y aumente la capacidad de vigilancia.
- Crear y financiar refugios para mujeres víctimas de abusos.
- Ampliar las facultades de los legisladores de los estados para que vigilen el desempeño de las instituciones del poder ejecutivo estatal.
- Ampliar el alcance del juicio de amparo para asegurar que haya justicia colectiva mediante un formato de litigio colectivo, que exija cambios

generales de políticas e instituciones en los casos de grave intransigencia, como lo han sido estas centenas de homicidios investigados con gran ineptitud.
- Aceptar demandas civiles por daños y perjuicios contra las instituciones policiacas intransigentes.
- Disponer el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familias.

Acciones binacionales

- Mantener la presión cívica sobre los sistemas judiciales de México y Estados Unidos, así como por su grave falta de profesionalismo en el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, mediante eventos de gran visibilidad, atención mediática y símbolos.
- Relacionar la violencia contra las mujeres con acciones políticas e investigaciones académicas en materia de seguridad y salud pública.
- Ampliar las coaliciones cívicas para que no sólo incluyan activistas de derechos humanos, sino también a los interesados en el desarrollo económico, pues el caos y la violencia de la región fronteriza pueden desalentar las inversiones estables.
- Fomentar la cooperación entre los cuerpos policiacos y agencias federales de investigación en materia de capacitación, laboratorios y centros de análisis de ADN, y líneas de información.
- Desarrollar lineamiento no sólo sobre los derechos de los acusados, sino también los derechos de las víctimas y sus familias.
- Movilizar a los gerentes de las maquiladoras para que ofrezcan cursos de autodefensa a sus empleadas.

- Exigir a los gerentes de las maquiladoras que hagan verificaciones de antecedentes y pruebas periódicas de detección de drogas a los choferes de los autobuses de las empresas en que se transportan las posibles víctimas.
- Exigir a las maquiladoras que paguen a los municipios impuestos de responsabilidad social para invertirlos en iluminación de calles, caminos asfaltados, transporte público y otros servicios que aumentan la seguridad en las calles.
- Modificar los programas de estudio de las escuelas públicas para que incluyan temas contra la violencia intrafamiliar y sexual para los alumnos de ambos sexos.
- Crear un Tratado de Derechos Humanos para América del Norte real, no meramente simbólico, al que las víctimas puedan acudir y cuyos informes estén acompañados de recursos y autoridad para hacer cambios.

El 3 de febrero de 2005, la embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado de prensa que decía:

> "Hoy me complace anunciar que el gobierno de Estados Unidos está dedicando cinco millones de dólares, distribuidos en el lapso de cuatro años, para crear programas en Chihuahua que impulsen la reforma judicial y apoyen a las víctimas de delitos", expresó el embajador Tony Garza. "Nuestra firme cooperación en material de vigilancia policiaca es fundamental, pues nos permite cumplir con nuestra responsabilidad más importante como servidores públicos: garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de México y Estados Unidos" (http://mexico.usembassy.gov/mexico/ep050203reforma.html).

Más de tres años después, preguntamos: ¿ese financiamiento ha hecho alguna diferencia?

BIBLIOGRAFÍA

Amigos de las Mujeres de Ciudad Juarez (2004), www.amigosdemujeres.org.

Amnesty International (2003), *Intolerable Killings: Ten Years of Abductions and Murders of Women in Ciudad Juarez and Chihuahua*, http://www.amnesty.org.

ANDREAS, Peter (2000), *Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide*. Ithaca, Cornell University Press.

ARCHIVOS, Coalition Against Violence toward Women and Families at the U.S.-Mexico Border, University of Texas, El Paso/ Department of Political Science/Staudt and Coronado.

BAILEY, John y Jorge CHABAT (eds.) (2002), *Transnational Crime and Public Security: Challenges to Mexico and the United States*, La Jolla, University of California, San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies.

BENÍTEZ, Rohry y cols. (1999), *El silencio que la voz de todas quiebra: mujeres y víctimas de Ciudad Juárez*, Chihuahua, Chih., Azar.

BIEMANN, Ursula (2002), "Performing the Border: On Gender, Transnational Bodies, and Technology", en Claudia SADOWSKI-SMITH (ed.),. *Globalization on the Line: Culture, Capital, and Citizenship at U.S. Borders*, Nueva York, Palgrave, pp. 99-118. Nota: Biemann produjo, además, una película con el mismo título.

BOWDEN, Charles (2002), *Down by the River: Drugs, Money, Murder and Family*, Nueva York, Simon & Schuster.

BURNETT, John, "On the Job: Chasing the Ghouls: The Juarez Serial Murders, and a Reporter Who Won't Let Go", *Columbia Journalism Review*, 2, marzo/abril, http://www.cjr.org/issues/2004/2/burnett-mexico.asp.

CORCHADO, Alfredo, "Juarez suspect says he is latest victims of legal system", *Dallas Morning News*, 16 de noviembre de 2006.

—— y Ricardo SANDOVAL (2004), "Juarez Slayings: Inquiry Indicates Police, Drug Ties. Disturbing reports say women were tortured and slain as celebration", *Dallas Morning News*, reimpreso en *Stars Voice* II, 1 (marzo), pp. 2-3.

CORONADO, Irasema, "Styles, Strategies, and Issues of Women Leaders at the Border", en Doreen MATTINGLY y Ellen R. HANSEN (eds.), *Women and Change at the U.S.-Mexico Border*, Tucson, Arizona, University of Arizona Press, 2006.

DIEBEL, Linda, "The Murdered Women of Ciudad Juarez", *Toronto Star*, 20 de febrero de 2006, http://www.ndpteachers.org/justice/'feminicide'.htm.

DOMINGO, Pilar (1999), "Rule of Law, Citizenship and Access to Justice in Mexico", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, 15, 1, pp. 151-191.

DUNN, Timothy (1996), *The Militarization of the U.S.-Mexico Border, 1978-1992: Low-Intensity Conflict Contrine Comes Home*, Austin, Center for Mexican American Studies, University of Texas.

FIELD NOTES (FN) (2002-2004), Amigos de las Mujeres de Ciudad Juarez meeting with New Mexico legislators, U.S. Consul, and Coalition Against Violence, NMSU, Las Cruces.

GASPAR DE ALBA, Alicia (2003), "The Maquiladora Murders, 1993-2003", *Aztlan: A Journal of Chicano Studies*, 28, 2. Otoño, pp. 1-17.

GIUGALE, Marcelo, Oliver LAFOURCADE, Vinh NGUYEN (2001), *Mexico: A Comprehensive Agenda for the New Era*, Washington, D. C., Banco Mundial.

GONZALES, Sergio (2002), *Huesos en el desierto*, Barcelona, Anagrama.

GRANOVETTER, Mark (1974), "The Strength of Weak Ties", *American Journal of Sociology* 78, 6, pp. 1360-1380.

GUILLERMOPRIETO, Alma (2003), "Letter from Mexico. A Hundred Women: Why has a decade-long string of murders gone unsolved?", *The New Yorker*, 29 de septiembre, pp. 82-93.

HUMAN RIGHTS WATCH (1999), *Systemic Injustice: Torture, "Disappearance" and Extrajudicial Execution in Mexico*. Nueva York, HRW.

INGLEHART, Ronald, Miguel BASÁNEZ y Alejandro MORENO (1998), *Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook: Political, Religious, Sexual, and Economic Norms in 43 Countries*, Ann Arbor, University of Michigan Press.

INTERNATIONAL TRANSPARENCY. CORRUPTION PERCEPTION INDEX, http://www.transparency.org. Consultado en marzo de 2004.

MAQUILADORA MURDERS, conferencia en la UCLA del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2003, http://chavez.ucla.edu/maqui_murders.

MARTÍNEZ, Óscar (1975), *Border Boom Town: Ciudad Juarez since 1848*, Austin, University of Texas Press.

MARTÍNEZ-MÁRQUEZ, Alejandra (2001, 2003), "A Feminist Response to Changes in the Sexual Violence Law in the State of Chihuahua" (inédito). También informes de investigación a Staudt (2003).

MEXICO SOLIDARITY NETWORK, http://www.mexicosolidarity.org.

MOLOEZNIK, Marcos Pablo (2003), "The challenges to Mexico in times of political change", *Crime, Law & Social Change* 40, pp. 7-20.

MONÁRREZ FRAGOSO, Julia, "Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 1993-2001", *Debate Feminista*, 13 de abril de 2002. Monárrez dictó, además, dos conferencias en El Paso Community Foundation en enero de 2002, y en la Universidad de Texas en El Paso, en abril de 2002, en las que mostró diapositivas con gráficas sobre índices de homicidio de mujeres.

Nodo50, contra información en la red, http://www.nodo50.org/pchiapas/documentos/juarez2.htm.

ORTIZ, Marisela (2002), "Crímenes contra mujeres: Un desesperado grito de auxilio", *Chamizal* 2, 1, julio-diciembre, pp. 23-30.

PATERSON, Kent (2001), "Deepening U.S.-Mexico Security Cooperation: As NAFTA's anti-narcotics apparatus focuses on public security, human rights activists grow worried", *Borderlines* 84, 9, 11, diciembre, http://americaspolicy.org/borderlines/2001/b184/b184security_body.html.

PICCATO, Pablo (2001), "'El Chalequero' or the Mexican Jack the Ripper: The Meanings of Sexual Violence in Turn-of-the-Century Mexico City", *Hispanic American Historical Review*, 82:3-4, pp. 623-651.

RODRÍGUEZ, Victoria (1997), *Decentralization in Mexico: From Reforma Municipal to Solidaridad to Nuevo Federalismo*, Boulder, Westview.

—— (2003), *Women in Contemporary Mexican Politics*, Austin, University of Texas Press.

SIMENTAL, Gabriel, "Investiga FBI robo de microchips en maquiladoras", *El Diario de Juárez*, 12 de marzo de 2006, http://www.diario.com.mx/portada/panorama/nota.asp?notaid=ab851f118195044683ada736d009ea6e.

SOLÍS, Hilda (2004), "In Search of Justice", Center for Latin American Studies newsletter, Invierno, 2004, pp. 3, 18-20.

SPENER, David y Kathleen STAUDT (eds.) (1998), *The U.S.-Mexico Border: Transcending Divisions, Contesting Identities*, Boulder, Lynne Rienner Press.

STAUDT, Kathleen (2003), Testimony before the Texas Legislature Border Committees, abril.

—— e Irasema CORONADO (2002), *Fronteras No Más: Toward Social Justice at the U.S.-Mexico Border*, Nueva York, Palgrave.

TORRES RUIZ, Gladis, "Murió 'El Egipcio', único condenado por feminicidio en Juárez", Cimacnoticias 2 de junio de 2006, http://www.cimacnoticias.com/noticias/06jun/06060207.html.

U.S. Department of Justice (USDOJ) (2004), consultado el 22 de marzo de 2004. DEA Congressional Testimony, por Sandalio González, agente especial a cargo, 15 de abril de 2003. Nota: se pueden encontrar muchos artículos similares, tomados de informes anuales y testimonios, en http://www.usdoj.gov/dea.

V-Day. http://www.vday.org.

Washington Office on Latin America. http://www.wola.org.

WASHINGTON VALDEZ, Diana (2003), "Ciudad Juárez: así empezó todo", *La Jornada*, 31 de octubre.

—— (2002), "Death Stalks the Border". Inserto Especial, http://www.elpasotimes.com/borderdeath.